

INFORME SECRETARIAL: Bogotá D.C., once (11) de noviembre de dos mil veinte (2020). Al Despacho de la señora Jueza el expediente No. **2020 – 00427**, informando que la comunicación enviada a la accionada fue contestada y a la fecha se encuentra para resolver la presente **ACCIÓN DE TUTELA**. Sírvase proveer.

ANA RUTH MESA HERRERA
Secretaria

REPÚBLICA DE COLOMBIA



**RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO TRECE LABORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ D.C.**

Bogotá D. C., once (11) de noviembre de dos mil veinte (2020).

I. ANTECEDENTES

La señora MARÍA INES CABALLERO TORRES, identificada con C.C. 28.947.956, instauró ACCIÓN DE TUTELA en contra de la UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS – U.A.R.I.V –, por la presunta vulneración al derecho fundamental de petición, a la igualdad, a la vida, a la salud, al mínimo vital y la integridad personal.

Como fundamento de sus pretensiones señaló que interpuso derecho de petición el 27 de junio de 2020, solicitando a la U.A.R.I.V. la ayuda humanitaria, a lo que la Unidad no ha contestado ni de forma ni de fondo, pues lo único que le expresaron era que su estado de vulnerabilidad había sido superado pero aduce que no se encuentra inmersa en las causales de suspensión de ayuda humanitaria.

Aunado a lo anterior, manifestó que la Unidad ha fallado en el cumplimiento de conceder una fecha cierta y concreta en la cual se proporcionara efectivamente la indemnización, no han efectuado visita domiciliaria sino únicamente el PAARI, cuyo resultado discrepa de la realidad; adicionó que se le han negado a los

mecanismos para su estabilidad económica, por las dificultades presupuestales de la Unidad, violándose su derecho al mínimo vital.

II. TRÁMITE Y CONTESTACIÓN

La presente acción fue admitida mediante auto del 6 de noviembre de 2020. Allí se ordenó librar comunicación a la accionada para que rindiera un informe detallado acerca de cada uno de los hechos y pretensiones enunciados por la parte actora.

La **UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS – U.A.R.I.V** – allegó el informe requerido el 9 de noviembre de la presente anualidad, comunicando que la accionante se encuentra incluida en el Registro Único de Víctimas y que respondió la solicitud con el oficio No. 202072029237211 del 9 de noviembre de 2020. Asimismo, manifestó que la Resolución No. 0600120192220266 de 2019 notificado el 26 de julio de 2019, decidió suspender la entrega de los componentes de la atención humanitaria del hogar de la accionante, pues una vez efectuado el proceso de priorización se determinó que no es procedente materializar la entrega de la indemnización respecto de la actora. Indicó que mediante Resolución No. 0600120192220266R del 30 de agosto de 2019, notificada el 28 de septiembre de 2019 resolvió recurso de reposición interpuesto por la actora confirmando la suspensión; que mediante Resolución No. 201906446 del 5 de septiembre de 2019, notificada el 29 de septiembre de 2019, resolvió recurso de apelación confirmando nuevamente la suspensión de la entrega de la atención humanitaria.

Aunado a lo anterior, manifestó que respeto a la visita domiciliaria para la aprobación de ayudas humanitarias, no es posible efectuarla, toda vez que se vulneraría el derecho a la igualdad, pues dicha estrategia se efectúa a través del procedimiento de identificación de carencias, permitiendo conocer las características, capacidades y necesidades de los hogares en los componentes de alojamiento temporal y alimentación básica a través de las diferentes fuentes de información del SNARIV.

Por lo anterior, la Unidad solicitó que se nieguen las pretensiones incoadas en su contra, debido a que actuó dentro del marco de sus competencias cumpliendo con los mandatos legales y constitucionales, evitando vulnerar derechos fundamentales.

III. PROBLEMA JURÍDICO

El problema jurídico consiste en determinar si se vulneran los derechos fundamentales de la accionante ante la presunta omisión de la Unidad de dar respuesta de fondo a la solicitud radicada.

IV. CONSIDERACIONES

1. Competencia.

Es competente este Despacho para conocer de la presente acción constitucional, con fundamento en el artículo 86 Superior, el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, el numeral 1° del art. 1° del D. R. 1382 de 2000 y el artículo 1 del Decreto 1983 de 2017.

2. Del derecho de petición.

Frente a la prerrogativa fundamental de petición, debe decirse que ésta fue elevada a rango constitucional en el artículo 23 de la Carta Política; que se configura como una garantía subjetiva que concede a las personas la facultad de elevar solicitudes respetuosas ante las autoridades y, además, a obtener pronta resolución a ellas, amén de que es una vía expedita que exige un pronunciamiento oportuno.

Dicho derecho, además fue desarrollado en la Ley 1755 de 2015, en la que se indicaron las reglas generales para presentar y contestar el derecho de petición, estableciéndose en su primer artículo "Sustitúyase el Título II, Derecho de Petición, Capítulo I, Derecho de Petición ante las autoridades-Reglas Generales, Capítulo II Derecho de petición ante autoridades-Reglas Especiales y Capítulo III Derecho de Petición ante organizaciones e instituciones privadas, artículos 13 a 33 de la Parte Primera de la Ley 1437 de 2011", refiriendo entonces el artículo 13 de la normativa sustituida que:

"Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades, en los términos de este código, por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución completa y de fondo sobre la misma respuesta".

En el mismo compendio normativo, se dispusieron los términos que se deben tener en cuenta para resolver los derechos de petición, de la siguiente manera:

"Art. 14. Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición

deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción. Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones:

1. Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los diez (10) días siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario, se entenderá, para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente, la administración ya no podrá negar la entrega de dichos documentos al peticionario, y como consecuencia las copias se entregarán dentro de los tres (3) días siguientes.

2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción.

Parágrafo. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del término señalado en la ley expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto."

Al respecto, la Corte Constitucional en Sentencia C-007 de 2017, memorada en el proveído T-044 de 2019, indicó que la respuesta al derecho de petición debe cumplir con las siguientes características para que se considere que se encuentra satisfecha el derecho fundamental bajo estudio:

"(i) Prontitud. Que se traduce en la obligación de la persona a quien se dirige la comunicación de darle contestación en el menor tiempo posible, sin que exceda los términos fijados por la Ley 1755 de 2014. En aras de fortalecer esta garantía el Legislador previó que la ausencia de respuesta puede dar lugar a "falta para el servidor público y (...) a las sanciones correspondientes de acuerdo con el régimen disciplinario."

(ii) Resolver de fondo la solicitud. Ello implica que es necesario que sea clara, es decir, inteligible y de fácil comprensión ciudadana; precisa de modo que atienda lo solicitado y excluya información impertinente, para evitar respuestas evasivas o elusivas; congruente, o que se encuentre conforme a lo solicitado de modo que lo atienda en su totalidad; y consecuente con el trámite que la origina, cuando es el caso en que se enmarca en un proceso administrativo o una actuación en curso, caso en cual no puede concebirse como una petición aislada.

(iii) Notificación. No basta con la emisión de la respuesta sino que la misma debe ser puesta en conocimiento del interesado y, ante el juez de tutela. Ello debe ser acreditado."

Sin embargo, es necesario resaltar que la jurisprudencia constitucional es consistente en sostener que el derecho de petición no supone que la Administración deba acceder a lo pedido, como se vio en la ya citada sentencia T-044 de 2019, en la que se dijo:

"Esta Corporación ha destacado además que la satisfacción del derecho de petición no depende, en ninguna circunstancia de la respuesta favorable a lo solicitado. De modo tal se considera que hay contestación, incluso si la respuesta es en sentido negativo y se explican los motivos que conducen a ello. Así las cosas se ha distinguido y diferenciado el derecho de petición del "el derecho a lo pedido", que se emplea con el fin de destacar que "el ámbito de protección constitucional de la petición se circunscribe al derecho a la solicitud y a tener una contestación para la misma, y en ningún caso implica otorgar la materia de la solicitud como tal."

Aunado a las anteriores consideraciones, encuentra esta Juzgadora que el derecho de petición, como los demás derechos fundamentales, cuentan con unos componentes que constituyen su núcleo esencial y otros que son denominados elementos estructurales. Los primeros son características ontológicas de las prerrogativas constitucionales, mientras que los segundos se erigen como factores circundantes que permiten la garantía del derecho fundamental y que guardan cercanía con el núcleo esencial. De esta forma se expuso en sentencia C-007 de 2017:

"Este Tribunal ha precisado el entendimiento de los últimos tres requisitos en el sentido de establecer que los elementos estructurales se refieren a aquellos más cercanos a su núcleo esencial, es decir, los aspectos inherentes al ejercicio del derecho que consagren límites, restricciones, excepciones y prohibiciones que afecten dicho núcleo esencial, delimitado por la Constitución. Adicionalmente, ha definido el núcleo esencial como "como el mínimo de contenido que el legislador debe respetar, es esa parte del derecho que lo identifica, que permite diferenciarlo de otros y que otorga un necesario grado de inmunidad respecto de la intervención de las autoridades públicas. Y, en sentido negativo debe entenderse "el núcleo esencial de un derecho fundamental como aquel sin el cual un derecho deja de ser lo que es o lo convierte en otro derecho diferente o lo que caracteriza o tipifica al derecho fundamental y sin lo cual se le quita su esencia fundamental".

Entonces, abarcando propiamente el artículo 23 de la Constitución Política, la Corte Constitucional describió dichos axiomas en la sentencia T-058 de 2018, así:

"Siguiendo estas consideraciones, la Corte Constitucional mediante la Sentencia C-951 de 2014, por medio de la cual se estudió el Proyecto de Ley Estatutaria "(p)or medio del cual se regula el derecho fundamental de petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo", precisó que el núcleo esencial del derecho fundamental de petición comprende: i) la formulación de la petición; ii) la pronta resolución, iii) la respuesta de fondo y iv) la notificación al peticionario de la decisión. En concordancia, se ha precisado que sus elementos estructurales son: (i) el derecho de toda persona a presentar peticiones ante las autoridades por motivos de interés general o particular; (ii) la solicitud puede ser presentada de forma verbal o escrita; (iii) la petición debe ser formulada respetuosamente; (iv) la informalidad en la petición; (v) la prontitud en la resolución; y (vi) la competencia del Legislador para reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas".

En este punto, valga hacer énfasis acerca de la preponderancia que detenta la prueba documental que acredita el efectivo enteramiento al peticionario de la respuesta generada por la entidad pública o el particular receptor de la petición, pues sin esta no es posible perfeccionar el núcleo esencial del derecho de petición, como lo ha manifestado la H. Corte Constitucional en sentencia T-149 de 2013:

"La constancia que logre obtener la entidad de la notificación de su respuesta al peticionario, constituye la prueba sobre la comunicación real y efectiva que exige la jurisprudencia para perfeccionar el núcleo esencial del derecho de petición, desde luego, siempre que la respuesta se ajuste a las exigencias que líneas atrás fueron desarrolladas.

A partir de esta reflexión, es claro que si la entidad está obligada a tener una constancia de la comunicación con el peticionario para probar la notificación efectiva de su respuesta, con mayor razón el juez constitucional, para evaluar el respeto al núcleo esencial de tal garantía debe verificar la existencia de dicha constancia y examinar que de allí se derive el conocimiento real del administrado sobre la respuesta dada".

Razón por la cual, en el caso particular evidencia el Despacho que la respuesta 202072013351721 del 28 de junio de 2020 respondió de fondo y de forma a la actora, al informarle que mediante Resolución No. 0600120192220266 de 2019 debidamente notificada el 26 de julio de 2019, decidió suspender definitivamente la entrega a la ayuda humanitaria, la cual fue recurrida y resuelta mediante Resolución No. 0600120192220266R del 30 de agosto de 2019 notificada

personalmente a la actora el 28 de septiembre de 2019, que decidió confirmar la suspensión; resuelta en instancia de apelación mediante Resolución No. 201906446 del 5 de septiembre de 2019 notificada personalmente a la accionante el 29 de septiembre de 2019; Así mismo en el alcance a la respuesta del derecho de petición 202072029237211 del 9 de noviembre de 2020 enviada el mismo día, al correo electrónico señalado por la accionante.

Así, considera el Despacho que la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas emitió una respuesta de forma clara, congruente, completa y de fondo, como quiera que expresó que el 5 de julio de 2019 se analizó la situación actual del hogar mediante el proceso de identificación de carencias, activado el 8 de julio de 2019 que arrojó como resultado que en el hogar se encontraban víctimas que superan el año de ocurrido el desplazamiento forzado, aclarando que el estado de valoración de esas personas fue obtenido en la fecha de la realización de dicho procedimiento; que una vez consultado el SNARIV y el CIFIN, se determinó que la accionante el 12 de septiembre de 2016 adquirió un crédito por un monto igual o superior a dos salarios mínimos legales mensuales vigentes SMLMV, pues al momento de la adjudicación se determinó que los beneficiarios del mismo contaban con capacidad productiva para cubrir la deuda adquirida, concluyendo que los integrantes al recibir ingresos que le permitan cumplir con sus obligaciones financieras, también pueden cubrir los componentes de la subsistencia mínima.

Adicionalmente aseguró que el 4 de julio de 2014, se asignó vivienda gratis a la accionante, beneficio que sule al hogar el componente de alojamiento temporal. También se evidencia que las respuestas se notificaron personalmente y se comunicaron electrónicamente al correo informado por la accionante, por lo que se presenta un hecho superado.

Al respecto, la Corte Constitucional ha dicho que cuando la vulneración o la amenaza de los derechos cuya protección se reclama cesan, se presenta lo que la jurisprudencia constitucional ha denominado "hecho superado", tal y como la Corte lo reiteró en sentencia T- 297 de 2019:

Con relación a primera categoría (carencia actual de objeto por hecho superado), el artículo 26 del Decreto 2591 de 1991 lo reglamenta en los siguientes términos:

"Si, estando en curso la tutela, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará fundada la solicitud únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes".

Sobre el particular, la Corte Constitucional, en numerosas providencias, ha interpretado la disposición precitada en el sentido de que la carencia actual de objeto por hecho superado, tiene lugar cuando desaparece la vulneración o amenaza al derecho fundamental invocado.

En tal sentido esta Corporación ha señalado los criterios que deben verificarse a fin de examinar y establecer la configuración de la carencia actual de objeto por hecho superado desde el punto de vista fáctico. Estos criterios son los siguientes:

"1. Que con anterioridad a la interposición de la acción exista un hecho o se carezca de una determinada prestación que viole o amenace violar un derecho fundamental del accionante o de aquél en cuyo favor se actúa.

2. Que durante el trámite de la acción de tutela el hecho que dio origen a la acción que generó la vulneración o amenaza haya cesado.

3. Si lo que se pretende por medio de la acción de tutela es el suministro de una prestación y, dentro del trámite de dicha acción se satisface ésta, también se puede considerar que existe un hecho superado".

En conclusión, con el pronunciamiento claro, expreso, completo y de fondo por parte de la entidad y con la notificación electrónica de las respuestas se resarcieron todos los perjuicios que se pudieron causar a la accionante, por lo que desapareció la vulneración al derecho fundamental de petición, motivo por el cual se declarará la carencia actual del objeto por hecho superado.

Finalmente, frente a los derechos fundamentales a la igualdad, a la vida, a la salud, a la integridad personal y al mínimo vital que la tutelante invoca, es pertinente recalcar que la indemnización administrativa debe de contar con un soporte probatorio de cara a su exigibilidad, máxime cuando esta entrevera principios de gradualidad, progresividad y sostenibilidad fiscal, como bien lo señaló la Unidad. Tal afirmación supone una carga en cabeza de la actora si pretende que se ordene el pago de una indemnización por la senda de la protección de los derechos a la igualdad y al mínimo vital, como lo ha expuesto la sentencia T-571 de 2015:

"En igual sentido, ha manifestado que: "un juez no puede conceder una tutela si en el respectivo proceso no existe prueba, al menos sumaria, de la violación concreta de un derecho fundamental, pues el objetivo de la acción constitucional es garantizar la efectividad de los derechos fundamentales, cuya trasgresión o amenaza opone la intervención del juez dentro de un procedimiento preferente y sumario." Así las cosas, los hechos afirmados por el accionante en el trámite de una acción de tutela,

deben ser probados siquiera sumariamente, a fin de que el juez pueda inferir con plena certeza la verdad material que subyace con la solicitud de amparo constitucional.

Por otra parte, la Corte en Sentencia T-131 de 2007 se pronunció sobre el tema de la carga de la prueba en sede de tutela, afirmando el principio "onus probandi incumbit actori" que rige en esta materia, y según el cual, la carga de la prueba incumbe al actor. Así, quien pretenda el amparo de un derecho fundamental debe demostrar los hechos en que se funda su pretensión, a fin de que la determinación del juez, obedezca a la certeza y convicción de que se ha violado o amenazado el derecho".

En consecuencia, no se impartirá ninguna orden frente a los derechos a la igualdad, a la vida, a la salud, a la integridad personal y al mínimo vital, como quiera que no es posible conceder una tutela donde no hay prueba de la violación de los derechos invocados.

V. DECISIÓN

En razón a lo anteriormente expuesto, el **JUZGADO TRECE LABORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ D.C.**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

PRIMERO: **NEGAR EL AMPARO DEL DERECHO DE PETICIÓN**, en la acción instaurada por la señora María Inés Caballero Torres, identificada con C.C. 28.947.956, por las razones expuestas.

SEGUNDO: **NOTIFICAR** la presente providencia a las partes a través de correo electrónico, de conformidad con el Acuerdo PCSJA20-11632 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura y en atención a la situación sanitaria del país por la enfermedad denominada COVID-19.

TERCERO: **ENVIAR** el expediente a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión si en el término de ejecutoria esta decisión no es impugnada.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La Jueza,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Yudy', with a stylized flourish underneath.

YUDY ALEXANDRA CHARRY SALAS